

¿TIENE EL ESTADO SOCIAL MODERNO QUE SALVAR UN MERCADO EN CRISIS?

Fernando VALLESPÍN

LA crisis económica que tuvo su punto álgido en la caída de Lehman Brothers en agosto de 2008 sólo consiguió aminorarse gracias a la activa intervención del Estado. Esta intervención se concretó en medidas tales como la masiva inyección de dinero público en el sistema financiero (10 billones de euros sólo en Europa), la reducción de los tipos de interés al mínimo, o la puesta en marcha de estímulos fiscales. Estas decisiones políticas, unidas a la iniciativa de abordar una reforma en profundidad del sistema financiero internacional, tuvieron el efecto general de devolver la *confianza* a los mercados y a los agentes económicos. Se ha reproducido, por tanto, la misma pauta de salida a la crisis –en el caso de que no retorne con mayor virulencia– que ya había sido puesta en práctica durante las anteriores crisis del capitalismo.

Desde los años ochenta hemos venido asistiendo, en efecto, a ciclos económicos acelerados de subidas y caídas, que son seguidas de intervenciones masivas de dinero público, las cuales a su vez sirven para financiar después un nuevo *boom* económico. La gran cuestión que se abre es, sin embargo, si tiene sentido este rescate político de un sector financiero depredador y sobredimensionado (el valor de los activos financieros es varias veces mayor que el PIB global), o si, por el contrario, cabe algún tipo de acción política que imponga un paradigma alternativo. Una vez más, la gran enseñanza de esta crisis estriba en el reconocimiento de que sin una intervención política decidida no es posible un adecuado funcionamiento del sistema económico (se ha refutado de nuevo la tesis de que los mercados tienden al equilibrio), pero que, a la vez, la política está todavía lejos de encontrar un conveniente ajuste con el sistema económico internacional. Se ha convertido en su red salvadora, pero no en su auténtico tutor. La conexión entre política y economía ha pasado así de nuevo al centro del debate intelectual.

Con todo, desde el momento en el que se escriben estas páginas, salta a la vista que, primero, la crisis está todavía lejos de haber sido superada; y, en segundo lugar, que fuera de las anteriores medidas mencionadas, la política no ha conseguido evitar una cierta sensación de impotencia frente a los grandes intereses económicos. El primer aspecto sale claramente a la luz si observamos las tres fases en las que se ha ido concretando la acción estatal: al comienzo se trató de inyectar dinero al sistema financiero para evitar el *credit crunch*; después se intervino para salvaguardar a grandes empresas particularmente amenazadas, como las automovilísticas, y en aumentar el gasto para satisfacer las necesidades de aque-

Los sectores o grupos sociales que habían quedado en paro o en una situación precaria; por último, y como consecuencia de ese mismo gasto, el gran problema parece ser ahora el propio endeudamiento de los Estados. La crisis griega ha puesto esta cuestión en el centro del debate político, pero el endeudamiento excesivo es un problema que afecta a la mayor parte de los Estados europeos, a los Estados Unidos y muchos otros más. El problema de fondo es que en momentos de retracción del consumo y de la inversión de las empresas, sólo queda aumentar la demanda en el sector exterior, algo ciertamente difícil si la mayoría de los Estados se encuentran en una situación similar; o bien, y así es como se ha llegado adonde ahora mismo estamos, incrementando el déficit o emitiendo deuda pública. Esta última tiene la gran dificultad, sin embargo, de que aquellos países que, como en el caso griego, se excedan en dicha emisión, comienzan a entrar en una espiral diabólica. A mayor deuda, mayores tipos de interés, mayor desconfianza de los mercados y, en el caso de la zona Euro, mayores presiones para la reducción del gasto por parte de los socios de la unión monetaria europea. La gran cuestión que se abre, por tanto, es cómo conseguir una estabilización de las finanzas públicas si las políticas de gasto siguen siendo imprescindibles para dotar de impulso a la economía y para preservar la red de protección social. Sólo cabe ya una espectacular reducción del gasto a costa de los ingresos de los funcionarios, mediante la reducción de las inversiones públicas, o a través de un incremento de los ingresos subiendo los impuestos. Pero, como es sabido, esta última medida tiene el problema de amenazar al propio aumento de la demanda interna. Como se ve, una situación grave que aún puede entrar en un círculo más perverso si atendemos a los imperativos de la política interna de cada sistema democrático, que hace enormemente difícil el consenso de las fuerzas políticas y sociales en torno a los necesarios sacrificios que es imprescindible imponer. El debate sobre quiénes deben financiar la salida de la crisis no ha hecho más que empezar. No sólo a nivel interno, también dentro de la unión monetaria europea, que como consecuencia de la crisis griega se ha visto sacudida por diferentes movimientos divergentes respecto a qué hacer para evitar el *default* de uno de sus miembros.

Todo lo anterior ha tenido el efecto de sacar a la luz la impotencia relativa de la política frente al empuje de los mercados. Hay una contradicción palmaria entre las declaraciones de los grandes líderes internacionales contra el capitalismo especulativo en los primeros momentos de la crisis —e incluso en afirmaciones recientes (*)— y aquello que podemos observar en la realidad fáctica. Lejos de atreverse a emprender una reforma en profundidad del sistema, que, recordemos, posee una dimensión global, se concentraron en resolver los problemas de sus propias economías. Mientras tanto, aquellos actores que provocaron la debacle financiera —los Goldman Sachs, J.P. Morgan, Deutsche Bank, etc.— no sólo no fueron penalizados por sus maniobras especulativas, sino que, después de haber sido saneados con dinero de los contribuyentes, han comenzado a hacer negocios a costa de la deuda de los países más débiles. El caso más flagrante es la emisión de CDS (*credit default swaps*), que aseguran frente a la posibilidad de que la deuda pública de un determi-

(*) Las últimas, antes de cerrar este texto, fue el escrito que, a comienzos del mes de marzo de 2010, A. Merkel, N. Sarkozy, el Primer Ministro griego y el jefe del Eurogrupo, Jean-Claude Juncker, dirigieron a Barroso para instarle a actuar contra las prácticas especulativas que afectaban a la deuda griega.

nado Estado pueda entrar en quiebra. A medida que, por ejemplo, los CDS sobre la deuda griega aumenten su precio, los inversores comenzarán también a retirar su confianza sobre la misma, arrastrando al país a una posibilidad cierta de *default*. Lo sangrante del caso, es que los titulares de dichos CDS tienen un incentivo para que esto efectivamente ocurra, ya que su valor se incrementa de forma paralela a la pérdida de confianza en la capacidad de pago del Estado en cuestión. Unos CDS elevados, por su parte, sirven de señal para que las agencias de calificación, como Moody's, Fitch o Standard & Poors, bajen su evaluación de la deuda griega, con lo cual dicho país ve con espanto cómo aumentan sus primas sobre sus bonos, crece la dificultad de colocarla y ya sólo puede aspirar a obtener la ayuda de sus socios europeos o del propio FMI para recuperar la credibilidad.

Hasta ahora, no se han diseñado prevenciones eficaces frente a prácticas como éstas, y, en general, puede afirmarse que el esfuerzo presupuestario por reducir por la vía política la situación derivada del descontrol de los mercados financieros ha quedado sin respuesta efectiva. Si comparamos esta crisis con otras de las grandes crisis anteriores, como la del 29 y la de los primeros años setenta, lo que se observa es que en aquéllas hubo al menos una importante combinación de liderazgo y teoría; es decir, un conjunto de ideas específicas para salir de la crisis. En la del 29 uno y otra se concretan en el *New Deal* y en las medidas de la socialdemocracia keynesiana; en la de los setentas en el neoliberalismo amparado por Reagan y Thatcher, que acabaría imponiendo su hegemonía los treinta años subsiguientes. Hoy, por el contrario, asistimos estupefactos a la incompetencia de las ideas y a la ausencia de un verdadero liderazgo en el escenario internacional que impide la búsqueda seria de un paradigma alternativo. Con todo, hay un hecho que es incontrovertible, toda crisis acaba comportando consecuencias sociales y políticas específicas, crea las condiciones para la gestación de nuevas formas de poder y de reorganización del Estado.

No es fácil saber, desde luego, cuáles sean las señas de identidad de los tiempos venideros. Lo que sí parece cierto es que estamos ante una fase de reconstrucción del modelo que nace con la implosión de la Tercera Revolución Industrial y las tecnologías de la información y la consecuente globalización e internacionalización de la economía y de los diferentes ámbitos de la acción social. Las señales de quiebra del modelo del nuevo capitalismo financiero, que sustituyó al anterior «capitalismo productivo», así como las limitaciones a la acción política más allá del Estado-nación, hacen imperativa una importante renovación de los presupuestos sobre los que se ha venido edificando el brusco salto hacia un nuevo orden social. En lo que sigue trataremos de ofrecer sintéticamente, algunas hipótesis tentativas sobre cuáles son las principales pautas del cambio, presuponiendo siempre que se trata de una mera «clarificación del presente» que no deja de tener la ambición de anticipar algunas tendencias de futuro, eso que Herbert Simon llama la «modelización de lo desconocido».

Algunas hipótesis y clarificaciones

a) *El retorno del Estado*

Por lo que ya llevamos visto, esta crisis permite hablar de un indudable *retorno del Estado*, que se concreta en una multiplicidad de manifestaciones. La primera y

quizá fundamental, tiene que ver con su renacido papel en el escenario internacional. Lejos de buscarse una «gobernanza global», como se apuntaba en las primeras fases de la globalización, hemos vuelto más bien al esquema de la «cooperación internacional» (entre Estados) y a la «geopolítica clásica». El triunfo de los *Grupos G.*, que acaban subordinando las organizaciones internacionales a los dictados de unos «pocos Estados», el nuevo papel de los *Estados* emergentes, y el debilitamiento de los procesos de integración supranacional, son claros signos de este giro hacia más Estado. *Ad intra* se percibe también en las tentaciones proteccionistas, y, en general, en los intentos por reafirmar la gobernabilidad interna. En lo relativo a las diferentes formas de organización política, estamos cada vez más lejos del ideal de la democracia como único régimen político legítimo. El peso económico de China y la evidencia de una gran proliferación de «democracias defectivas» (en Rusia, por ejemplo), ha revitalizado la clásica teoría del «respeto» de las diferentes formas de organización política de cada uno de los Estados. Otras manifestaciones de este nuevo impulso por acentuar el control estatal de los procesos que hasta no hace mucho se pensaban en manos de instituciones supranacionales o internacionales se percibe en los intentos por parte de algunos de ellos por poner coto al libre despliegue de Internet para hacer más eficaz la protección de los derechos de propiedad intelectual o, en general, valores tales como la protección de datos y la persecución de delitos informáticos, cuando no, como en el caso de China, la propia libertad de expresión.

Por todo lo anterior, una importante consecuencia de la crisis bien puede concretarse en la aparición de un «Estado Neomoderno» y en la congelación, cuando no devaluación, de las estrategias de *sovereignty pooling* que tanto hicieron por conformar las instituciones de la UE y en sustentar el despliegue de numerosas organizaciones internacionales. El Estado, el héroe de la modernidad, parece haberse reforzado, algo que ya venía produciéndose como consecuencia de las migraciones internacionales y la necesidad de reorganizar los flujos entre fronteras. La crisis ha contribuido a dar una nueva vuelta de tuerca a este proceso. Por tanto, contrariamente a las predicciones de los últimos años, lo «transnacional» se va conformando cada vez más como algo «internacional», y cada vez asistimos a una demanda de más Estado para hacer frente a los nuevos problemas. Paradójicamente, sin embargo, y a la vista de los acontecimientos recientes, sólo una decidida estrategia de cooperación más allá del Estado podrá resolver los conflictos y las dificultades que acucian a las diferentes sociedades. Por mucho de lo ya dicho al comienzo, este repliegue sobre acción estatal es posible que consiga una reorganización de la economía con un tímido sistema de organización internacional apoyado en el protagonismo de la cooperación entre Estados, pero todo parece indicar que hará falta algo más que eso. La presión de las «cuestiones o los bienes públicos globales», como el cambio climático, por ejemplo, hacen imperativa una más decidida cooperación transnacional. El Estado seguramente seguirá siendo el actor fundamental de este tipo de acciones, pero siempre y cuando sepa interiorizar esta otra cara cooperativa y al fin tome conciencia de las nuevas interdependencias.

b) *La fuente del conflicto político*

Otro cambio importante que se percibe como consecuencia de la crisis es la vuelta a la fuente del conflicto político sobre base económica, al paradigma de la

distribución frente al más posmoderno de la identidad. La pregunta del celebrado libro de H. Lasswell, *Who gets what, when, how?*, retorna al centro del debate político. En parte como consecuencia del mismo intervencionismo del Estado con dinero público, que lo ubica ante la necesidad de legitimar su acción desde la perspectiva de sus diferentes destinatarios potenciales, que compiten entre sí por estos beneficios públicos. Si lo característico de la modernidad fue la institucionalización del «paradigma de la distribución», el poner el énfasis de la conflictividad social a partir del problema de la justicia social (diferencias de clase, explotación, desigualdad, derechos humanos de segunda generación), durante la posmodernidad dio paso a un mayor peso de toda la conflictividad asociada a «lo cultural» e identitario. Aquí se impone el «paradigma del reconocimiento», donde las cuestiones de la falta de respeto, imperialismo cultural, etc. se dan la mano con otras enfocadas sobre las luchas por la identidad y la diferencia (multiculturalismo, género/sexualidad, autonomía subnacional). La heterogeneidad y el pluralismo cultural se establecen como premisa básica y comienza a desarrollarse una especie de «particularismo universal» que niega el principio moderno de una «cultura universal» o la búsqueda de la homogeneidad a partir de los rasgos de la cultura mayoritaria. Paralelamente, sin embargo, se va desarrollando una nueva forma de homogeneidad cultural a través de la cultura de masas transnacional, que genera una nueva forma de «integración cultural» global a partir de una industria mundial del entretenimiento cosida mediante una curiosa mezcla de rasgos de culturas particulares («Globalización»). Los excesos derivados de la práctica posmoderna de lo identitario han provocado, sin embargo, lo que tentativamente podemos calificar como una «reafirmación de Occidente», o, lo que es lo mismo, Occidente parece haber cesado ya de intentar proclamar la universalidad de sus valores, y ha pasado a una actitud defensiva respecto a su propia identidad. Se ha convertido en una cultura particular más, con la diferencia de que eso le permite operar más críticamente con otras culturas. No es de excluir, por tanto, una revitalización del paradigma del choque de civilizaciones tal y como vemos en la actual actitud ante la inmigración.

c) *Los valores*

A lo largo de los últimos años hemos asistido a un importante cambio de valores. Si en el mundo moderno hay una promoción de valores *densos*, como el orden, la seguridad, la solidaridad, la identidad nacional o los valores materiales, en el posmoderno predominan los valores *ligeros* o *líquidos* (Z. Bauman), el individualismo, la autoexpresividad, los valores posmateriales, el relativismo cultural, el «todo vale». Hoy, por el contrario, parece como si de nuevo volvieran al centro del debate los valores *densos*, el orden, la seguridad, la estabilidad, la responsabilidad. Además de un nuevo valor que no ha sido analizado todavía en sus consecuencias políticas, como es el de la «sostenibilidad». ¿Cómo encaja este valor, que presupone una reconceptualización del crecimiento económico como premisa básica del sistema, con una economía en crisis? ¿Cuál es su congruencia con los demás elementos del orden normativo básico de la sociedad?

La revitalización del Estado que antes mencionábamos tiene mucho que ver con esta nueva constelación valorativa, apoyada sin duda en un nuevo sentimiento de miedo que se va generalizando entre la población de las sociedades desarrolla-

das. De forma casi imperceptible a lo largo de los últimos años se han ido extendiendo en nuestras sociedades una gran cantidad de temores más o menos difusos, una nueva sensación de inseguridad cuyas causas no son fáciles de averiguar; tampoco sabemos bien cómo atajarla. Una explicación bastante convincente ve el origen de este sentimiento en la progresiva presencia mediática de un discurso sobre los *riesgos* a los que estamos expuestos por el propio desarrollo tecnológico. Ejemplos de esto puede ser el miedo a que la manipulación del genoma humano pueda dar lugar a prácticas eugenésicas descontroladas; al cambio climático y las pesadillas con las que muchas veces se describen sus potenciales efectos; a la manipulación química, industrial y genética de los alimentos; a los nuevos descubrimientos sobre el efecto de determinadas drogas o medicamentos; y un largo etcétera que va desde la normal aplicación de la energía nuclear hasta los peligros asociados a prácticas tan cotidianas como el volar en líneas aéreas de bajo coste.

Otros temores tienen ya más que ver con las amenazas al concepto tradicional de seguridad, como es el caso del terrorismo *jihadista* o los delitos provocados por mafias transnacionales. Desde los atentados del 11 de Septiembre y sus derivaciones en Madrid y Londres, el terrorismo internacional ha pasado al primer plano de la preocupación y es sabido que en algunos países la intensa percepción de esta amenaza ha llegado a provocar reacciones políticas dirigidas a limitar algunas libertades. Los delitos provocados por mafias transnacionales u otros más endógenos que ocasionalmente captan la atención del público han abundado en la sensación de inseguridad ciudadana, aunque ésta no se corresponda con un aumento efectivo de los delitos respecto a épocas anteriores. A ello se suma una tan precipitada como irresponsable asociación entre delincuencia e inmigración, que hace que las migraciones sean percibidas como amenazadoras por parte de algunos sectores sociales. En algunas sociedades está presente, además, un cierto discurso que ayuda a transmitir la sensación de que la inmigración supone, en efecto, un desafío generalizado a nuestra forma de vida. Como si ésta hubiera comenzado ya a ser colonizada y destruida desde dentro por costumbres y prácticas extrañas.

A todo ello le podemos sumar la retórica sobre las amenazas derivadas de la globalización, con la aparentemente imparable competencia asiática y la inevitable crisis económica que nos acecha. La consecuencia de ello sería la puesta en peligro de casi todos los logros de nuestro Estado de Bienestar, con su efecto directo sobre el futuro de las pensiones y del empleo. Estos fenómenos, asociados a la nueva preocupación por el futuro energético, están fomentando un renovado temor por nuestro nivel de vida futuro y por la potencial incapacidad para poder seguir financiando muchas de las prestaciones sociales de las que hoy gozamos en la mayoría de los Estados europeos. Otros miedos giran en torno a los familiares temores seculares a pandemias, que ha contribuido a reverdecer recientemente la gripe aviar.

En suma, temores que han arraigado en nuestra sociedad y miran hacia el Estado como la única institución con capacidad para dotarnos de seguridad y que, como ahora veremos, tienen un impacto decisivo en la conformación actual del discurso ideológico.

d) *Las ideologías*

Lo característico de las ideologías correspondientes al período de la modernidad fue su encaje en lo que Anthony Giddens denominó «la política como emanci-

pación». Por tal entendía un tipo de política dirigida fundamentalmente a realizar la *emancipación* frente a la injusticia, la falta de libertades, la herencia de un mundo que se consideraba asimétrico y lastrado por toda una historia de dominación. A pesar de sus diferencias, en la realización de estos fines tanto el liberalismo –más interesado en la libertad–, como el socialismo –más centrado en la igualdad y la justicia social–. Ambas se construyeron, además, a partir de discursos omnicomprensivos, que ofrecían una interpretación «completa» de la realidad y ofrecían recetas para conformar la realidad a partir de sus premisas básicas. Con el despliegue de un enfoque posmoderno, entramos, sin embargo, en una forma de política como «estilos de vida». La cohesión de los principios y la uniformidad de los discursos dieron paso así a una visión de las ideologías políticas mucho más deshilvanada y dependiente de la propia selección –o «menú»– que cada individuo hiciera de sus preferencias políticas, y esto se plasmó notoriamente en la volatilidad del voto de los electores medios occidentales. Hoy, sin embargo, asistimos a una verdadera reconfiguración de lo ideológico, que en este aspecto al menos se aleja bastante de la moderna convencional. Pero también de la posmoderna. Como antes señalábamos, ante la situación de miedo generalizado que parece imponerse por todo el mundo desarrollado se ha impuesto una ideología única cuyas rasgos más característicos son el *mantenimiento* de los privilegios de estas sociedades, no la mejora radical y drástica de sus condiciones de vida. Un «conservacionismo» generalizado. La sensación que hoy predomina en la mayoría de las sociedades desarrolladas es que hemos de *conservar* lo que ya tenemos más que tratar de proyectarnos hacia mayores cotas de progreso. Contrariamente a lo que ha sido la postura convencional del enfoque político clásico de la modernidad, desde este «conservadurismo del miedo» el futuro se ve más como la sede de nuevos y casi insolubles problemas que como un lugar más emancipado y amable para vivir. Nuestra desconfiada mirada permanece en el presente y se da por satisfecha con lo ya conseguido; se encuentra excesivamente condicionada por la ansiedad que nos crea nuestra sensación de vulnerabilidad. No hay ambición de futuro; el futuro ha colapsado sobre el presente; es como si todo futuro fuera a ser necesariamente peor. Si la imagen de la modernidad nos ofrecía una visión del mismo como la sede de la reconciliación del hombre consigo mismo, la superación de la escasez, el *progreso...*, en los momentos actuales el futuro se nos presenta como la sede de todos los males; no es algo que hayamos de construir desde el presente, sino algo frente a lo que hemos de defendernos. Puede que aquí, en esta visión de las ideologías, es donde deja de encajar la hipótesis de una cierta vuelta al paradigma de la modernidad. La generalizada imposición de este «conservacionismo» no implica, sin embargo, que no sea posible distinguir entre posicionamientos políticos. Uno de los objetivos de las investigaciones sobre nuestro presente reside en la necesidad de rastrear cuáles son las diferencias ideológicas en nuestros días. Por muy anclada que esté la pauta generalizada de «conservacionismo», sí es posible distinguir dos formas distintas de interpretarlo, una «conservadora», predispuesta a combatir los nuevos miedos a partir de un retorno a las fronteras de los Estados y a la confortable recuperación de las identidades nacionales. Y otra, «de izquierdas», más propenso a una alteración de la forma en la que se lleva a cabo la acción política, a nuevas formas de gobernanza global, a tomarse en serio la ya inevitable interdependencia y a promocionar una nueva forma de vida acorde con nuestros desafíos.

Como hipótesis conclusiva de estas consideraciones se propone la idea de que estamos ante una reafirmación institucional «defensiva», sin un claro impulso por cambiar el *status quo*. Nos falta una «hoja de ruta», el esbozo de un modo de vida diferente al que querer aspirar, algo así como lo que en su día fuera el «pacto social-democrático». Hoy parece que nos damos por satisfechos con una serie de regulaciones políticas sobre la economía financiera dentro de un tímido sistema de organización internacional apoyado sobre el protagonismo de la cooperación entre los Estados centrales del nuevo orden mundial y un Estado protector con capacidad para calmar la ansiedad que genera la incertidumbre ante el futuro. El abandono del discurso del progreso tiene, sin embargo, el inconveniente de que nos impide acceder a otro modelo de organización social, económica y política más acorde con el mundo en que vivimos. Éste es el verdadero desafío de nuestro tiempo.